



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA PRIMERA CIVIL

Medellín, quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05266 31 03 002 2021 00094 02

Proceso: Declarativo.
Demandante: JHON JAIRO MEDINA RESTREPO.
Demandado: SERGIO SÁNCHEZ LONDOÑO
Extracto: No se advierte pifia en la tasación de costas, específicamente en lo dispensado como agencias en derecho, pues lo mismo se compadece con lo que reglamenta la materia. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la apelación interpuesta por la parte demandante, contra el auto calendado el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2.023), dimanado del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Envigado.

ANTECEDENTES

En la sentencia del 22 de febrero de 2.022 se estimaron parcialmente las pretensiones de la demanda, declarándose, entre otras, la nulidad del contrato promesa de compraventa celebrado el 9 de octubre de 2.019 respecto al inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria 001-616545, igualmente, se ordenaron restituciones mutuas (ver archivo 11 cuaderno de primera instancia), providencia en la que en cuanto a las costas se indicó:

“3º. Se condena en costas a la parte demandada. Líquidense en su debida oportunidad por la Secretaria del Despacho de conformidad con el artículo 393 lb. Como agencias en derecho, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, se fija la suma de \$50.000.000.” Subraya adrede.

La parte actora apeló tal sentencia, pero frente a lo que hoy es motivo de alzada (liquidación de costas), no hubo controversia¹; por lo que siguiendo el trámite procesal mediante auto hoy censurado se dijo:

“En la sentencia se ordenó a secretaria, que al liquidar las costas tuviera por concepto de agencias en derecho la suma de \$50.000.000, lo que claramente se advierte fue un error aritmético que obliga se corregido.”

“Acorde al ACUERDO No. PSAA16-10554 de Agosto 5 de 2016 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el limite a las tarifas de agencias en derecho en procesos declarativos de mayor cuantía, es entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. De tal manera que si la condena es a pagar la suma de \$262'711.011,27, \$50.000.000 excede de manera flagrante esos límites.

“Conforme a lo anterior, al liquidarse las costas, inclúyanse por concepto de agencias en derecho, la suma de \$12.000.000.oo.”

“Lo anterior, no es una modificación a la sentencia ejecutoriada, puesto que el aparte del monto de las agencias en derecho es simplemente una orden que se da a la secretaria del juzgado para que la tenga en cuenta en la etapa de liquidación de costas, y es precisamente en la etapa de liquidación de costas, que las partes cuentan con los recursos para ejercer el derecho de defensa y contradicción con respecto a este tema.”. (sic). Subraya adrede.

El mismo día (31 de enero de 2.023), se liquidaron y aprobaron las costas del proceso en la suma de \$12'000.000.oo, pues en segunda instancia no hubo condena por ese concepto².

De los recursos de reposición y apelación:

Frente a tal decisión el demandante interpuso tales recursos aduciendo:

¹ Resolviendo la apelación que el demandante interpuso contra la decisión de primera instancia, esta Corporación modificó únicamente lo referente al interés que esa parte debe reconocer al demandado en la restitución monetaria, pasándolo de comercial al civil según el artículo 1617 del C.C. (archivo 14 del Cuaderno Segunda Instancia).

² Ver archivo 18 del cuaderno de primera instancia.

1- En la sentencia de primera instancia dada la prosperidad de sus pretensiones, se estableció a su favor condena en costas por \$50'000.000.00, lo que es correcto atendiendo que el negocio que originó el contrato y que en últimas se declaró nulo, fue por la suma de \$1.670'000.000.00, donde si las agencias en derecho son entre el 3% y 7.5%, la condena debe estar entre \$50'100.000.00 y \$125'250.000.00.

2- Conforme al artículo 366 del C. G. del P., debe considerarse, entre otras, la naturaleza, calidad y duración de la gestión, también que en segunda instancia prosperó la alzada que presentó. En esos términos, debe mantenerse lo fijado o en su defecto actualizar la condena.

En el traslado del caso el demandado guardó silencio.

En la providencia del 25 de abril hogaño se consideró que las tarifas de las agencias en derecho se fijan conforme el artículo 5.1 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2.016 dimanado del Consejo Superior de la Judicatura, siendo que para los procesos declarativos de mayor cuantía está *“entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”*.

En este caso, las pretensiones ascendieron a \$556'310.000.00, por lo que el 3% es de ello son \$16'689.000.00; no obstante, si lo pedido prospera parcialmente, así será la condena en costas –parcial-, de ahí que la estimación se ajustó a \$12'000.000.00, lo cual también resulta proporcional a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada. Con esos argumentos decidió no reponer³.

³ Archivo 21, cuaderno de primera instancia.

Subsidiariamente, concedió la alzada, la que se resuelve de plano tal como lo prevé el artículo 326 procesal civil, previas:

CONSIDERACIONES

Según el artículo 320 del C. G. del P., la teleología de la apelación es que el Superior funcional examine lo decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo.

El objeto de apelación es “*el monto de las agencias en derecho*”, prerrogativa dispuesta en el artículo 366.5 ídem, recordándose que sobre el concepto de costas procesales, la doctrina ha indicado;

“La Corte ha entendido que las costas procesales son aquellos gastos en que incurre una parte por razón del proceso. Esa noción comprende tanto las expensas como las agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los aranceles, entre otros. Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado.”. Subraya intencional. Corte Constitucional, Sentencia T 625 de 2.016.

En tales definiciones coincide la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia⁴; donde circunscritos a lo que es objeto de alzada nos referiremos a los siguientes puntos: primero, frente a las agencias en

⁴ Tal Corporación ha indicado: ““(…) [A]quella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial”, están conformadas por dos rubros distintos: **las expensas** y las **agencias en derecho**», primeras que corresponden a «los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados»⁴ (resalto intencional), mientras que las segundas, a «la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho»; no obstante, como lo ha señalado la Sala, «esos valores **son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial**, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra ésta y aquel»⁴ (destaco nuestro); (C.C. T-674/97, citada en T-282/12) (CSJ STC8313-2019, 26 jun. 2019, rad. 2019-00701-02) (...). STC542-2020.

derecho en primera instancia; segundo, sobre el margen del *a quo* en su estimación y la reducción que oficiosamente efectuó; y tercero, sobre la fijación final, y si esta atendió a los parámetros del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

Ciertamente en la sentencia de primera instancia se dispusieron costas en favor del actor y a cargo del demandado, sobre tal condena no hay discusión, siendo un punto que se resolvió en los términos del artículo 365.2 procesal civil.

En cuanto al monto de las agencias en derecho, inicialmente se dijo que eran \$50'000.000.oo, pero luego oficiosamente y arguyéndose “*error aritmético*”, se reconocieron \$12'000.000.oo.

Ahora, si bien es cierto el artículo 285 del C. G. del P., como primera regla prevé que “*La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció...*”, lo dispuesto en la sentencia como agencias en derecho no es un absoluto, pues a la luz del artículo 286 del C. G. del P., los errores aritméticos pueden ser corregidos “*en cualquier tiempo*” de oficio o a petición de parte; a lo que se suma que la condena en costas en sí misma no constituye la decisión de fondo del asunto (artículos 278-282 ibidem), sino corresponde a un punto general que se provee por ministerio legal, tal como lo indica el numeral 2º del artículo 365 del mismo ordenamiento procesal.

Refuerza la anterior idea el hecho que el numeral 5º del artículo 366 del C. G. del P., deja en claro que; “*La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.*”, eventos estos que se presentan con posterioridad a la sentencia.

Entonces, coincidiendo con el *a quo*, el valor del negocio jurídico declarado nulo no necesariamente es el parámetro para fijar las agencias en derecho, sino, ello debe atender a las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, quien reguló lo pertinente a través del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, el que tiene aplicación a los procesos iniciados después del 5 de agosto de 2.016.

El artículo 5.1. de esta última normatividad, indica que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de un proceso declarativo de mayor cuantía, estará “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”, y si en el proceso existen pretensiones pecuniarias y no pecuniarias, la base serán las primeras, o sea, las monetarias (par. 2º artículo 3º ídem).

En el asunto de marras unas pretensiones eran pecuniarias y otras no, donde circunscritos a las primeras, ascienden a \$556´310.000.00, lo que, en principio, se consideraría sino fuera porque el *petitum* del actor se estimó parcialmente, específicamente, no se accedió a las pretensiones 2ª, 3ª y 4ª, correspondientes a la multa del 20% pactada en el numeral 9º del contrato declarado nulo; el daño emergente y lucro cesante, respectivamente. Es tal prosperidad parcial la que faculta al Juez para “*abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial*”, tal como se deriva del artículo 365.5 procesal civil.

En esos términos, el escenario procesal brindó un margen amplio para la estimación, donde de cara a los criterios para su tasación (naturaleza del proceso, calidad, cuantía, y duración de la gestión realizada), está claro que la parte actora:

- Presentó la demanda;
- Gestionó la notificación del demandado;
- Presentó alegatos;
- Logró la prosperidad parcial de sus pretensiones;

- Apeló la sentencia de primera instancia; y,
- Consiguió que su recurso se estimara parcialmente.

Con todo lo anterior, en lo tasado por el *a quo* no se advierte pifia o desacierto. La discrecionalidad judicial en la fijación resultó acertada y se compadece de las actuaciones realizadas, que como gestión idónea, se itera, llevó a que se estimaran parcialmente las pretensiones, de donde se tiene como adecuado el reconocimiento de las agencias que se reprocha, lo que conlleva a la confirmación de la decisión atacada.

Sin costas en esta alzada en la medida que no se advierte su causación (artículo 365.8 del C. G. del P.).

Por lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2.023), dimanado del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Envigado, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente digital al Juzgado de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO